

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Francisco Javier Caroca Luengo, abogado, en representación de don Cristian Ramón Cádiz Cáceres, demandante en causa sobre despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de prestaciones seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, Rit O-217-2022, deduce recurso de queja, en contra del Ministro de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua señor Jorge Luis Fernández y el Abogado Integrante don Alberto Salvador Abril, quienes mediante resolución de diecisiete de junio del presente confirmaron la sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós dictada por el a quo que declaró caduca la acción.

Segundo: Que, los jueces recurridos informaron que tuvieron en consideración lo siguiente:

a.- El actor fue desvinculado con fecha treinta de septiembre de 2021, y ejerció su acción por despido injustificado el once de abril de 2022.

b.- Al tenor del artículo 168 del Código del Trabajo la acción intentada caduca en el término de 60 días hábiles contados desde la separación, término que por aplicación del artículo 8°, de la Ley N°21.226, se entendió prorrogado “hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.”

c.- La Ley N°21.379, que modificó la Ley N°21.226, estableció que toda “referencia a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública declarado por decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al tiempo en que éste sea prorrogado ha de entenderse que las respectivas reglas refieren al término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021.”

d.- La historia fidedigna del establecimiento de la Ley N°21.379, contenida en el Mensaje de 20 de septiembre de 2021, indica, en su numeral II, que el objetivo del proyecto fue dar continuidad al servicio de justicia, extendiendo por un acotado y razonable plazo, el régimen jurídico establecido por la ley N°21.226, para el ejercicio de las acciones que indica –siendo la de despido injustificado una de ellas- en condiciones que resulte conciliable con el otorgamiento de seguridad para la salud de las personas que deben concurrir a tribunales a cumplir con



actuaciones dispuestas y la certeza para el ejercicio de sus derechos, “el que habrá de prolongarse hasta el término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021. De esta forma, se permitirá, generar un espacio de tiempo adecuado para que los tribunales de justicia y los demás actores institucionales que intervienen en los sistemas de justicia puedan ir proyectando e implementando las medidas necesarias para darle continuidad a los servicios, una vez que expire la vigencia de la ley N°21.226.”

Continúa razonando el Mensaje, en el numeral III, bajo el título Contenido del Proyecto de Ley, que su texto propone modificaciones a la ley N°21.226, incorporando –y esto es esencial - la norma tendiente a prolongar, de manera acotada y breve, la vigencia de la ley N°21.226, ya no supeditada al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio de Chile, declarado por el decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y sus respectivas prórrogas; sino que, a un plazo cierto, a extenderse hasta el treinta de noviembre de 2021.

Señalan que discrepan del criterio del quejoso, conforme al cual considera que el plazo de cincuenta días que consideraba la Ley N°21.226 comenzó a correr a contar del treinta de noviembre de 2021, y que expirado ese término principió a correr el de 60 días hábiles de caducidad del artículo 168 del Código del Trabajo.

Expresan que el análisis del quejoso no repara en que el espíritu de la Ley N°21.379, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento, fue que la Ley N°21.226 extendería su vigencia únicamente hasta el treinta de noviembre de 2021, fecha esta última en la cual cesó el régimen jurídico de excepción que la señalada ley estableció para los procesos judiciales, audiencias, actuaciones judiciales, plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, por lo que no es razonable entender que un término pueda empezar a correr el mismo día en que la Ley que lo dispuso perdió su vigencia.

Arguyen que fue ese análisis el que condujo a la conclusión que el plazo de caducidad de la acción por despido injustificado que establece el artículo 168 del Código del Trabajo comenzó a correr a las 00:00 horas del primero de diciembre de 2021, por lo que a la fecha en que se dedujo la demanda, esto es, el once de abril de 2022, se encontraba largamente vencido, concordando de ese modo con el razonamiento del tribunal *a quo* plasmado en la resolución en alzada.



De este modo, para motivar la interlocutoria que originó el recurso de queja, se indicó en ella: "...que la regla del artículo 8 inciso tercero de la Ley N°21.226 debe entenderse comprendida dentro del plazo que fijó la Ley N°21.379, y que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021..."

Finalmente expresan que tratándose, de un análisis exegético, el que realizaron en base al elemento gramatical y al espíritu del Legislador claramente manifestado en la historia fidedigna del establecimiento de las Leyes N°21.226 y 21.379, puede el quejoso legítimamente disentir de ese razonamiento y de la conclusión contenida en la decisión, pero sin que ello permita entender, como erradamente lo postula, que la resolución no se encuentra debidamente fundada ni, menos aun, que esa discrepancia interpretativa justifica el uso del presente arbitrio.

Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387). También cuando una determinada norma legal se ha interpretado sin considerar los principios que la informan, en concreto el del interés superior del niño.

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir "faltas o abusos graves" cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la "trascendencia", y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que



la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia. (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sexto: Que del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se aprecia lo siguiente:

a.- El trabajador fue despedido el 30 de septiembre de 2021 y ejerció su acción por despido injustificado el 11 de abril de 2022.

b.- En audiencia preparatoria de 12 de mayo de 2022, se declaró la caducidad de la acción interpuesta.

c.- Apelada dicha resolución, el tribunal de alzada la confirmó.

Séptimo: Que del estudio de los antecedentes es posible observar que la decisión impugnada razona sobre el supuesto que la Ley N°21.379, extendió la vigencia de la Ley N°21.226 únicamente hasta el treinta de noviembre de 2021, fecha esta última en la cual cesó el régimen jurídico de excepción que la señalada ley estableció para los procesos judiciales, audiencias, actuaciones judiciales, plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, por lo que no estimaron razonable entender que un término pueda empezar a correr el mismo día en que la Ley que lo dispuso perdió su vigencia.

Octavo: Que, a fin de resolver sobre la caducidad de la acción de despido injustificado interpuesta, se debe considerar que el artículo 11 de la Ley N°21.226 señala que, en cada una de las demás disposiciones de la presente ley en que se refiera a la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública, debe entenderse por “Vigencia del estado de excepción constitucional” al término que se extienden hasta el 30 de noviembre de 2021.

Por su parte, el artículo 8 inciso tercero de la Ley N°21.226 establece que, en materia laboral, los plazos de caducidad se prorrogarán hasta 50 días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe.

Noveno: Que uno de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo y una de sus manifestaciones concretas, es el principio “*pro-operario*”, respecto del cual la doctrina señala como manifestación fundamental la regla *in dubio pro-*



operario, cuya aplicación resulta necesaria cuando frente a varias interpretaciones posibles de una norma, el juez debe seguir la más favorable al trabajador.

Décimo: Que a la luz de la interpretación lógica de las normas conforme a la regla *indubio pro-operario*, debe entenderse que, para efectos de la ley, el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe ocurrió el 30 de noviembre de 2022, y que los plazos de caducidad que señala el artículo 168 del Código del Trabajo se prorrogarán hasta 50 días hábiles más, computados desde el 30 de noviembre de 2021.

Entender lo contrario implicaría aplicar la norma restringiendo los derechos de los trabajadores, obviando los plazos de caducidad que contempla la legislación especial y vulnerando su espíritu, en cuanto lo pretendido fue dar un trato más favorable al ejercicio de la acción del trabajador.

Undécimo: Que, de la manera descrita, al aplicar los jueces recurridos una interpretación restrictiva, han incurrido en una falta que ha limitado el ejercicio de los derechos del recurrente privándolo de una tutela judicial efectiva.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, **se acoge** el recurso de queja interpuesto en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua Ministro señor Jorge Luis Fernández y el Abogado Integrante don Alberto Salvador Abril, razón por la cual, se deja sin efecto la resolución de diecisiete de junio del presente dictada en ingreso N° 425-2022, y en su lugar **se revoca**, en lo apelado la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos Rit O-217-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, declarando que se rechaza la excepción de caducidad opuesta.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al tribunal pleno, por no haber mérito bastante para ello.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora **Gajardo** y del Ministro Suplente señor **Mera**, quienes fueron de opinión de rechazar el presente arbitrio, por estimar la primera que, la resolución recurrida contiene la correcta interpretación que debe darse al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 21.226 y el segundo, por considerar que el presente arbitrio se funda en una disconformidad en la interpretación de la norma en comento, sin que pueda considerarse que aquella que le han dado los Ministros recurridos, constituya en ningún caso, una falta o abuso cometido en el ejercicio de sus funciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 24.904-2022



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Raúl Mera M., y el Abogado Integrante señora Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintidós.



En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

